

Subsidios, migración y el desafío habitacional

El acceso a la vivienda continúa siendo uno de los desafíos estructurales más relevantes del país. Así lo confirma el reciente boletín del Núcleo de Humanidades y Ciencias Sociales de Faro UDD, que analiza la evolución del subsidio DS19 entre 2018 y 2025, en un contexto marcado por un déficit habitacional que bordea las 500 mil viviendas y más de 1,2 millones de hogares que requieren mejoras o ampliaciones.

El estudio aporta antecedentes que invitan a una reflexión seria y necesaria. Por un lado, evidencia el crecimiento sostenido del programa DS19, que pasó de poco más de dos mil subsidios anuales en 2018 a superar los trece mil en 2025, consolidándose como una herramienta relevante dentro de la política habitacional. Por otro, pone en el centro del debate un elemento sensible: la relación entre migración y acceso a estos beneficios.

Si bien la gran mayoría de los subsidios ha sido asignada a población chilena —un 94,5% del total—, el aumento en la participación de beneficiarios extranjeros, particularmente de nacionalidad venezolana, ha sido significativo en los últimos años. Más aún, el informe señala que, hacia 2025, la relación de asignación alcanza 1,13 subsidios a población migrante por cada uno otorgado proporcionalmente a chilenos.

Este dato, lejos de alimentar interpretaciones simplistas, debe ser comprendido en su contexto. Chile ha experimentado en la última década un incremento sostenido de su población migrante, lo

que inevitablemente presiona sistemas ya exigidos, como el habitacional. La política pública, en ese sentido, enfrenta el complejo equilibrio entre garantizar derechos básicos sin generar percepciones de desigualdad o trato preferente.

A nivel regional, el Biobío no está ajeno a esta realidad. Con más de 12 mil subsidios asignados en el período, comunas como Los Ángeles, San Pedro de la Paz, Hualpén y Chiguayante concentran buena parte de los beneficiarios extranjeros, configurando nuevos escenarios sociales y urbanos que requieren planificación y gestión.

Pero el informe también revela otra arista igual de relevante: las brechas entre los recursos presupuestados y los efectivamente ejecutados en algunas regiones. Este punto abre una discusión sobre la eficiencia del gasto público y la necesidad de mejorar la implementación de las políticas, más allá de su diseño.

En definitiva, el debate que plantea este estudio no es solo técnico, sino profundamente social. Se trata de cómo el país enfrenta un déficit histórico en vivienda, en un contexto de cambios demográficos acelerados, y cómo logra hacerlo resguardando principios de cohesión social y a la vez, sostenibilidad.

La vivienda no es solo un bien material; es la base sobre la cual se construyen proyectos de vida y estabilidad. Por ello, cualquier política en esta materia debe ser abordada con responsabilidad, transparencia y una mirada de largo plazo.